

Medellín, dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	<b>EJECUTIVO CONEXO</b>
Radicado	<b>05001 31 03 016 2022 00152 01</b>
Demandante	<b>PROMOTORA DE PROYECTOS HARAS SANTA LUCÍA S.A.S.</b>
Demandado	<b>MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ</b>
Juzgado Origen	<b>DIECISÉIS CIVIL CIRCUITO MEDELLIN</b>

Decide el Despacho la apelación interpuesta frente al auto del 11 de noviembre de 2022, mediante el cual se rechazó de plano el incidente de nulidad formulado por la demandada.

### 1. ANTECEDENTES.

Mediante auto del 2 de junio de 2022, el juzgado de origen libró mandamiento de pago en contra de la demandada y a favor de la demandante, ordenándole a aquella el pago de la suma de \$312'156.663 más los intereses moratorios desde el 15 de mayo de 2022 hasta el pago total de la obligación.

Mediante escrito del 29 de agosto de 2022, la demandada presentó escrito de solicitud de nulidad procesal de que tratan los numerales 3 y 4 del artículo 133 del CGP.

Respecto de la causal consagrada en el numeral 3 de la mencionada norma, precisó que se actuó después de configurada la causal de interrupción procesal de que trata el numeral 1 del artículo 159 del CGP, en tanto, la demandada MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ sufre una enfermedad mental grave que le imposibilita ejercer cualquier tipo de defensa, respecto de la cual se está tramitando proceso de adjudicación judicial de apoyo ante el Juzgado Noveno de Familia de Medellín con radicado 2017 00210. Preciso además que, ante la dependencia judicial mencionada, se tramita el proceso en busca del nombramiento de un apoyo que le permita realizar actos y negocios jurídicos como el pago que hoy solicita la demandante.

Frente a la causal 4, adujo que la demandada se encuentra indebidamente representada en tanto no cuenta con un curador o apoyo judicial que represente sus derechos, respecto de la cual argumentó que, las curadurías fueron derogadas por la Ley 1996 de 2019 y a la fecha no se había nombrado la persona de apoyo por parte del despacho competente. Así mismo, adujo que la demandada debía ser notificada a través de su representante, con el cual no cuenta a la fecha.

Mediante auto del 11 de noviembre de 2022, el a quo rechazó de plano la nulidad formulada, indicando que la solicitud formulada no cumplía los requisitos indicados en el artículo 135 del CGP, pues la parte pudo formularla como excepción previa en los términos del artículo 100 ibidem.

Adicionalmente indicó que, mediante decisión del 28 de junio de 2017 el Juzgado Noveno de Familia de Medellín declaró la interdicción provisoria de la demandante nombrándole como guardador al señor Álvaro de Jesús Restrepo Buriticá, quien compareció a la acción de nulidad absoluta que originó la acción ejecutiva y a quien se le ordenara la restitución del dinero por parte de esta corporación. Finalmente consideró que, mientras no se decida la acción de adjudicación judicial de apoyo a la demandante, la representación de esta continúa en cabeza del mencionado, mientras se le designa el correspondiente apoyo.

El apoderado de la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación frente al auto que rechazó la reforma de demanda<sup>1</sup>.

## **2. EL RECURSO.**

El recurrente se opuso a lo resuelto señalando que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 1996 de 2019, las curadurías fueron derogadas, por lo cual, Álvaro de Jesús Restrepo Buriticá no contaba con facultad para representar a la demandada María Regina Buriticá Sánchez para el momento en el que se le ordenó la restitución objeto de la acción ejecutiva. Indicó que solo hasta el 18 de octubre de 2022, el Juzgado Noveno de Familia de Medellín profirió sentencia de adjudicación de apoyo, no obstante, a la fecha no habido posesión del representante nombrado.

Respecto de la oportunidad para alegar la incapacidad o indebida representación de la demandada, precisó que, si bien pudo haberse promovido como excepción previa, de conformidad con el inciso primero del artículo 134 del CGP, la nulidad podía alegarse en cualquier tiempo.

Finalizó indicando que, en el presente asunto, no se tuvo en cuenta que la demandada es un sujeto de especial protección constitucional y que su discapacidad mental quedó acreditada en el proceso de nulidad que dio origen a la ejecución que se discute.

---

<sup>1</sup> Ver ruta: carpeta 01 / carpeta 03 / archivo 03.

Dentro del término de traslado, la demandante se pronunció indicando que la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín ordenó, al interior del proceso con radicado 05001 31 03 0016 2019 00109 01, la restitución de los dineros a cargo de *"MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ a través de su curador"* y que, en los poderes otorgados al apoderado judicial que formula el incidente, no se adujo actuar en dicha calidad, por ende, los solicitantes carecen de legitimación para formular la nulidad procesal.

Respecto de la calidad de curador provisional de la demandada con la que actuó Álvaro de Jesús Restrepo Buriticá indicó que, dentro del trámite de primera y segunda instancia, nunca se puso en conocimiento de las dependencias judiciales un cambio de tal calidad y que, según la sentencia del 18 de octubre de 2022, proferida por el Juzgado Noveno de Familia, es el mismo Álvaro de Jesús Restrepo Buriticá quien fue nombrado como persona de apoyo de la demandada. Finalizó indicando que, en todo caso, la indebida representación pudo alegarse como excepción previa, la cual no se propuso en la oportunidad procesal.

El 7 de marzo de 2023 el juzgado decidió no reponer la decisión con fundamento en que, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1996 de 2019, las personas nombradas como curadores o consejeros debían ser citadas por parte de los jueces de familia donde se hubieran nombrado, a fin de verificar si requería la adjudicación judicial de apoyos, con lo cual dedujo que la representación de la aquí demandada continuaba en cabeza de su hijo Álvaro de Jesús Restrepo Buriticá. Finalmente, precisó que el único legitimado para promover la nulidad incoada es Álvaro de Jesús Restrepo Buriticá en representación de la demandada y los demás solicitantes carecen de legitimación<sup>2</sup>.

## CONSIDERACIONES.

### 2.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, listado taxativo dentro del que se encuentra el proveído atacado en el numeral 6 de la mencionada norma.

---

<sup>2</sup> Ver ruta: carpeta 01 / carpeta 03 / archivo 06.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

## 2.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde determinar si en el presente asunto procede la nulidad de lo actuado por la configuración de las causales 3 y 4 del artículo 133 del CGP, la primera atendiendo a la existencia de enfermedad grave de la demandada y, la segunda atendiendo a la indebida representación de esta o su indebida vinculación a la litis o; si por el contrario, la misma se encuentra saneada o no se configuró y, con ello, habrá de confirmarse la providencia apelada.

## 2.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

### 2.3.1 Principio de protección de las nulidades procesales.

El fundamento jurídico de las nulidades procesales guarda su existencia en la obligación del juzgador observar con total respeto la ritualidad que es connatural al trámite judicial como demostración del sometimiento a las formas propias de cada juicio. Al respecto ha dicho la doctrina que:

*“La inobservancia o la desviación de las formas legalmente establecidas para la regular constitución y el debido desenvolvimiento de la relación procesal, constituyen verdaderas anormalidades que impiden en el proceso el recto cumplimiento de la función jurisdiccional. Como dichos errores in procedendo necesariamente van a influir, en mayor o menor medida, en el pronunciamiento de la sentencia de fondo, a la que por consiguiente faltará una base jurídica establece, de ello claramente resulta la razón de la trascendencia que en el ámbito de la casación tienen las nulidades procesales.”<sup>3</sup>*

Ahora bien, la procedencia en el decreto de cualquier causal de nulidad procesal, requiere la observancia en el cumplimiento de los principios que gobiernan aquella institución, en concreto, de los de “especificidad, protección, trascendencia y convalidación”<sup>4</sup>, y que a la luz del ordenamiento procesal civil es indispensable para dar curso a la petición respectiva.

<sup>3</sup> Humberto Murcia Ballén, Recurso de Casación Civil, Ed. Ibáñez, 2005, p. 573.

<sup>4</sup> CSJ, Sentencia SC 8210 del 21 de junio de 2016, rad. n.º 2008-00043-01.

Respecto del principio de protección como requisito de procedibilidad de las nulidades procesales, tiene dicho la Corte que este se relaciona:

*“con la legitimidad y el interés para hacer valer la irregularidad legalmente erigida en causal de nulidad, en cuanto, dado el carácter preponderantemente preventivo que le es inherente, su configuración se supedita a que se verifique una lesión a quien la alega”<sup>5</sup>*

En ese sentido, en lo que corresponde a la causal contemplada en el numeral 4 del artículo 133 del CGP, cobra especial importancia el aludido principio, en tanto, el legislador fijó un tratamiento diferenciado frente a esta causal específicamente, en lo que a su trámite y declaratoria concierne. Así lo consagra el inciso final del artículo 134 ibidem, al indicar: “[l]a nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo beneficiará a quien la haya invocado.”, a tono con lo previsto en el inciso primero del artículo 135 siguiente, que indica “[l]a parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla” y, a su turno, el inciso tercero de la misma norma dispone “[l]a nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada”.

De suerte entonces, que para que la declaratoria de la causal 4 del artículo 133 del CGP resulte procedente, resulta indispensable que la petición sea invocada por sujeto que resulte afectado con la misma.

### 2.3.2 Representación en transición de la Ley 1996 de 2019.

Antes de la vigencia de la Ley 1996 de 2019, la representación legal de las personas con discapacidad mental, de conformidad con la anterior redacción del artículo 1504 del Código Civil, era ejercida por su curador en los términos del artículo 52 de la Ley 1306 de 2009, curaduría derivada de la declaratoria judicial de interdicción provisional o definitiva de conformidad con los artículos 25 y 27 ibidem.

Posteriormente, en los términos del artículo 61 de la Ley 1996 de 2019 se derogaron las normas relativas a la interdicción y curadurías, dando paso a la “capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad” (art. 1 ib.), estableciendo la figura de apoyos para la toma de decisiones (art. 3 #2 y 4 a 7 ib.), definiendo los mecanismos para establecer apoyos para la realización de actos jurídicos a partir del artículo 9 de la mencionada ley.

---

<sup>5</sup> CSJ, sentencia SC del 1 de marzo de 2012, rad. n.º 2004-00191-01.

En palabras de la Corte, la interdicción se diferencia de la adjudicación de apoyos en que:

*"la interdicción priva de su capacidad jurídica a la persona que padece de alguna discapacidad física o psíquica, con lo cual queda imposibilitada para expresar su voluntad de manera libre y autónoma, tomar sus propias decisiones y autodeterminarse, ya que es un tercero quien la representa y decide en su nombre, en virtud de esa incapacitación.*

*La adjudicación de apoyos judiciales, en cambio, parte del reconocimiento de la capacidad jurídica plena de todas las personas con discapacidad y de aquellas circunstancias en las cuales se necesite mayor o menor apoyo en la toma de ciertas decisiones, en las que lejos de sustituir la voluntad de la persona, se dispone su acompañamiento en el proceso de cara a la comprensión de la situación, la apreciación de las consecuencias y la comunicación de la decisión."*<sup>6</sup>

Respecto de los procesos de interdicción en curso iniciados con anterioridad a la promulgación de la Ley 1996 de 2019, el artículo 55 determinó que estos debían *"ser suspendidos de forma inmediata"* y, el juez, podrá decretar *"el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad"*.

Bajo tal panorama, en los procesos de interdicción en curso en los que se hubiera decretado la interdicción y curaduría provisoria de que trataba el numeral 7 del artículo 42 de la Ley 1306 de 2009, el régimen de transición ordenaba la suspensión del trámite y, en caso de requerirse la intervención judicial para el ejercicio de los derechos patrimoniales y protección de las personas con discapacidad, el juez contaba con la potestad de levantar la interdicción y remover el curador provisional, a través de las medidas cautelares a que se refiere el mencionado artículo 55 de la Ley 1996 de 2019.

## 2.4 CASO EN CONCRETO.

Encuentra el Despacho que se presentó demanda ejecutiva el 16 de mayo de 2022, respecto de la condena dineraria impuesta en sentencia de segunda instancia del 30 de marzo de 2022 por esta corporación en proceso declarativo con radicado 05001-31-03-016-2017-00109-01.

---

<sup>6</sup> CSJ, sentencia SC714 del 27 de abril de 2022, rad. 2021-04507-00.

Mediante auto del 2 de junio de 2022, el juzgado de origen libró mandamiento de pago en contra de MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ y a favor de PROMOTORA DE PROYECTOS HARAS SANTA LUCÍA S.A.S., en los términos solicitados, providencia que se notificó por estado del 6 de junio de 2022 en los términos del inciso segundo del artículo 306 del CGP. Dentro del término de traslado, la demandada no formuló oposición alguna y, mediante auto del 8 de agosto de 2022, se ordenó seguir adelante la ejecución.

#### 2.4.1 Del cumplimiento del principio de protección.

Inicialmente, debe indicarse que, en atención al principio de protección, la única legitimada para promover la nulidad que aquí se decide es la demandada MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ, de quien se aduce la indebida representación y enfermedad grave como causal de interrupción.

En tal sentido, carecen de interés los solicitantes ESMERALDA RESTREPO BURITICÁ, ELIZABETH RESTREPO BURITICÁ, FABIO HERNÁN RESTREPO BURITICÁ, HERNANDO ADOLFO RESTREPO BURITICÁ y ÁLVARO DE JESÚS RESTREPO BURITICÁ en nombre propio, tal como lo indicó el a quo en la providencia del 7 de marzo de 2023.

Ahora bien, toda vez que ÁLVARO DE JESÚS RESTREPO BURITICÁ viene actuando en calidad de curador provisional de la demandada MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ desde el proceso principal, preliminarmente se cumple con el interés requerido y, si bien el poder fue otorgado en nombre propio, su actuación en el proceso comprende la calidad de representante de la demandada, en los términos del artículo 300 del CGP.

En tal sentido, preliminarmente se acredita la legitimación e interés y a continuación se dilucidará si en el presente caso se encuentra indebidamente representada la demandada como causal de nulidad formulada.

#### 2.4.2 De la representación de MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ.

Al respecto, debe indicarse que en el proceso<sup>7</sup> que dio origen a la sentencia que aquí se discute, MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ fue vinculada en el trámite de primera instancia mediante auto del 16 de

---

<sup>7</sup> Radicado 05001 31 03 016 2017 00109 00.

febrero de 2018<sup>8</sup> a través de su curador provisional ÁLVARO DE JESÚS RESTREPO BURITICÁ y en la sentencia que decidió la segunda instancia el 30 de marzo de 2022 se ordenó a la demandada, a través de su curador, la restitución de los dineros en la proporción y forma indicada.

Dicho curador provisional fue nombrado mediante en auto del 28 de junio de 2017<sup>9</sup>, en el proceso de interdicción con radicado 05001 31 10 009 2017 00210 00 adelantado ante el Juzgado Noveno de Familia de Medellín.

Ahora bien, cabe resaltar que la entrada en vigencia de la Ley 1996 de 2019 no dejó sin efectos de forma automática la curaduría provisional decretada en favor de MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ por el juez de familia, en tanto, de conformidad con el artículo 55, el proceso únicamente se suspendía por ministerio de la ley y era el juez del conocimiento, quien podría hacer uso de medidas cautelares dirigidas a la protección y disfrute de los derechos patrimoniales, para levantar la curaduría asignada a la mencionada demandada, actuación que no se advierte haberse proferido al interior del proceso.

Suponer que el levantamiento de la curaduría ejercida en favor de la señora BURITICÁ SÁNCHEZ se generaba de forma automática, contrariaría la prohibición de regresividad de los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues no debe olvidarse que tal figura propendía por la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental, luego, considerar que las personas con discapacidad quedaban desprotegidas con posterioridad a la promulgación de la legislación vigente, implicaría una regresividad en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Bajo tal panorama, ÁLVARO DE JESÚS RESTREPO BURITICÁ continuaba ejerciendo la representación legal de MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ para el momento en que se libró mandamiento de pago en la presente acción, hasta tanto el juez de familia no decidiera lo pertinente.

Nótese que la suspensión sólo se levantó mediante auto del 14 de julio de 2022<sup>10</sup>, adecuando la acción a la de adjudicación judicial de apoyo, la cual finalizó con sentencia del 18 de octubre de 2022<sup>11</sup> designando al

---

<sup>8</sup> Ver ruta: carpeta 05001-31-03-016-2017-00109-01 / carpeta 00 / archivo 01 página 560.

<sup>9</sup> Ibidem páginas 548 a 552.

<sup>10</sup> Ver ruta: carpeta 01 / carpeta 03 / archivo 01 páginas 49 a 50.

<sup>11</sup> Ibidem archivo 03 páginas 17 a 19.



mismo curador ÁLVARO DE JESÚS RESTREPO BURITICÁ como la persona de apoyo judicial de MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ.

Así las cosas, comparte la Sala la consideración del a quo respecto de la cual MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ se encontraba debidamente representada para el 2 de junio de 2022 fecha en que se profirió el mandamiento de pago y para el 6 de junio siguiente, fecha en la que se notificó por estados a las partes.

Por lo cual, la nulidad de que trata el numeral 4 del artículo 133 del CGP, por indebida representación de MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ es improcedente.

#### 2.4.3 De la enfermedad grave como causal de interrupción procesal.

Al respecto, establece el numeral 3 del artículo 133 del CGP que el proceso es nulo en todo o en parte cuando el proceso "*se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión*" y el numeral 1 del artículo 159 del CGP establece como causal de interrupción la "*muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad litem.*"

En tal sentido, en el plenario se encuentra acreditado que MARÍA REGINA BURITICÁ SÁNCHEZ sufre una enfermedad mental grave, así se declaró tanto en el proceso declarativo que dio origen a la presente ejecución, como en el trámite del proceso adelantado ante el Juzgado Noveno de Familia de Medellín con radicado 05001-31-10-009-2017-00210-00. No obstante, en atención a lo considerado en precedencia, la causal de interrupción no se configura en este caso, pues pese a la enfermedad grave que aqueja a la demandada, esta ha estado actuando por conducto de su representante, hoy apoyo judicial, ÁLVARO DE JESÚS RESTREPO BURITICÁ, situación que consecuentemente impide la configuración de la causal de nulidad alegada.

En definitiva, la Sala coincide con la improcedencia de la nulidad procesal solicitada, en los términos decididos por el a quo, motivo por el cual se confirmará la decisión de primer grado, sin imposición de costas por no haberse causado.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 11 de noviembre de 2022, mediante el cual se rechazó la nulidad procesal formulada por la demandada.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: REMITIR el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ  
Magistrado